EXPEDIENTE No: ****
QUEJOSO: INTEGRANTES DE LA
INSTITUCIÓN DE
ASISTENCIA PRIVADA
“INSTITUTO DE AYUDA
PARA FAMILIAS DE
CHOIX”
AGRAVIADO: IDEM
RESOLUCION: RECOMENDACIÓN No.
27/2010
AUTORIDAD
DESTINATARIA: SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE
SINALOA

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 8 de septiembre de 2010

DR. HÉCTOR PONCE RAMOS,
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa (CEDH), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º; 2º; 3º; 4º Bis y 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1º; 7º, fracción III; 16, fracción IX; 57 y 59 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, así como 1º; 4º; 77; 94; 95 y 96 de su Reglamento Interno, ha examinado los elementos contenidos en el expediente ****, relacionados con el caso de los integrantes de la Institución de Asistencia Privada “Instituto de Ayuda para Familias de Choix,” y vistos los siguientes:

I. HECHOS

1. El 14 de abril de 2009, personal de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sostuvo reunión con los integrantes de la Institución de Asistencia Privada “Instituto de Ayuda para Familias de Choix”, en la cual manifestaron el deseo de presentar escrito de queja por el servicio deficiente que se presta en el “Hospital ****”, con el argumento de que no cuenta con médicos especialistas como ginecólogo, anestesiólogo o traumatólogo.

También expresaron que no cuenta con una ambulancia para el traslado de pacientes a otros hospitales, igualmente que no cuenta con tanques de oxígeno

y reiteraron que los médicos especialistas sólo van una vez a la semana a determinadas horas a trabajar.

Manifestaron además que para el traslado de pacientes lo hacen en camionetas del Sistema DIF Municipal corriendo el riesgo que la salud de los pacientes empeore; así también que acuden a solicitar el servicio de la Cruz Roja pero se les cobra a los familiares los gastos de gasolina o cualquier otro gasto que pudiera surgir con motivo del traslado.

2. Para la debida integración del expediente de queja, se solicitó información al Director del Hospital ****, Sinaloa.

Del informe rendido por el titular de dicho Hospital se advierte que el personal médico cubre un horario de las 8:00 a las 21:00 horas en las áreas de pediatría médica, ginecología y obstetricia, cirugía general, traumatología y anestesiología, haciendo mención que sí cuentan con una ambulancia pero que no tiene el equipo adecuado para el traslado de los pacientes, por lo que los familiares de éstos solicitan el apoyo de la Cruz Roja Mexicana.

II. EVIDENCIAS

1. Acta circunstanciada de fecha 14 de abril del año 2009, en la que consta la reunión sostenida entre personal de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos con los integrantes de la Institución de Asistencia Privada "Instituto de Ayuda para Familias de Choix", reunión en la cual se recepcionó la queja correspondiente en contra del personal médico del Hospital ****, por hechos violatorios de derechos humanos consistentes en la deficiente prestación del servicio público.

2. Con fecha 24 de abril de 2009 mediante oficio número **** se solicitó información relacionada con los hechos al Director del Hospital ****, Sinaloa, autoridad señalada como responsable en el escrito de queja.

3. Con oficio sin fecha número ****, se recibió la información solicitada en el párrafo que antecede, en el cual el funcionario público manifestó, en lo que interesa y sobre todo en lo relacionado con la queja lo siguiente:

- Que el horario que tiene el personal médico de dicho Hospital, es de lunes a viernes, con horarios matutino y vespertino, cubriendo un horario entre ambos de las 08:00 a las 21:00 horas de lunes a viernes, y sábados y domingos de 08:00 a las 13:00 horas;
- Que los servicios que presta son de Pediatría Médica, Ginecología y Obstetricia, Anestesiología, Cirugía General y Traumatología;

- Se cuenta con un consultorio de urgencias equipado con mesa de exploración, estuche de diagnóstico, baumanómetro, estetoscopio, equipo de laringoscopia completo con cánulas endotraqueales, tres camas, una camilla, un carro rojo con desfibrilador, un monitor, un ventilador mecánico y una ambulancia pero sin equipamiento;
- En caso de no estar en posibilidades de brindar la atención médica en dicho Hospital, se les da la hora de traslado y acuden a solicitar los servicios de la Cruz Roja Mexicana, debido a que la ambulancia con que cuenta dicho Hospital no está equipada, y
- En cuanto a los servicios auxiliares de diagnóstico con los que cuentan son de laboratorio de análisis clínicos y Rayos X, y se cuenta con un quirófano y cinco tanques de oxígeno.

4. Con oficio **** de fecha 21 de julio de 2009, se solicitó de nueva cuenta información al funcionario público señalado como responsable.

5. Ante la omisión de respuesta, con oficio número **** de fecha 7 de septiembre del año 2009 se solicitó por segunda ocasión el informe correspondiente.

6. Acta circunstanciada de fecha 8 de septiembre del año 2009, en la que consta que personal de este organismo estatal se constituyó en las instalaciones que ocupa el Hospital ****, lo anterior debido a que de las dos solicitudes anteriormente referidas no se obtuvo respuesta.

7. Con oficio número **** de fecha 30 de octubre del mismo año, se recibió el informe en el cual a diferencia del primero se observa lo siguiente:

- En primer término, y a diferencia de la primera solicitud de informe, manifiesta que el horario del Hospital son las 24 horas del día, los 365 días del año;
- Envía un listado de los nombres de los médicos que prestan los servicios, así como los horarios de éstos;
- En el turno vespertino y nocturno no cuentan con personal médico de especialidades, y
- Que cuentan con una ambulancia modelo 2009 debidamente equipada.

8. Acta circunstanciada de fecha 10 de marzo del año 2010, en la que consta que personal de este organismo estatal se constituyó a las instalaciones del Hospital ****, entrevistándose con el Director de dicha institución de salud, el cual manifestó lo siguiente:

1. Que de lunes a viernes en el área de urgencias se cuenta con las especialidades médicas de Ginecología, Pediatría y Anestesiología; y,

2. Que sábados y domingos, en la misma área de urgencias, contaban con Cirugía General, Ginecología, Anestesiología, Pediatría y Traumatología.

Ante lo anterior, se le cuestionó que en caso de que las personas requirieran de un servicio que estuviera fuera de esos horarios, ¿cómo eran atendidos? o ¿dónde eran canalizados? externando que se les brindaba la atención por un médico general.

En cuanto a la falta de chofer para la ambulancia expresó que sí se cuenta con una persona, quien es enfermero general y técnico en urgencias médicas, mismo que no tiene un horario fijo, sino que cuando es requerido, se le habla por teléfono y acude al hospital ya que vive a tan sólo dos cuadras del mismo.

En dicha visita también se constató que la ambulancia cuenta con un tanque de oxígeno grande con su respectiva mascarilla y otros dos tanques pequeños.

Igualmente se entrevistó a unos usuarios que en el momento de la visita se encontraban solicitando los servicios, quienes al cuestionarlos por el traslado de los enfermos a otros hospitales, dijeron que eran trasladados en dicha ambulancia pero que les costaba aproximadamente entre \$ 600.00 y \$ 800.00, dependiendo del lugar a donde la persona era trasladada.

9. Dictamen médico elaborado por médico de apoyo a las labores que realiza esta CEDH.

III. SITUACIÓN JURÍDICA

De las constancias enumeradas en el capítulo de evidencias, una vez analizado el contenido de las mismas y de manera particular la entrevista que se le hizo de manera personal y directa al Director del mencionado Hospital, así como del cuestionamiento que se le realizó a los usuarios que en ese momento se encontraban en el Hospital esperando ser atendidos, se advierte, a diferencia de la información remitida vía oficio, que a los usuarios del Hospital ****, no se les brinda la atención médica debida, siendo objeto de violación a sus derechos humanos, por la deficiente prestación del servicio de salud que el mismo Hospital otorga.

De acuerdo a lo externado por el Director del mismo, no se cuenta con el personal médico adecuado, no funciona las 24 horas del día, mucho menos los 365 días del año, así como tampoco se cuenta con la unidad debidamente equipada para el traslado de pacientes a otros hospitales, ya que éste servicio en caso de requerirse son los mismos usuarios los que pagan por éste.

IV. OBSERVACIONES

Sabido es que el derecho a la protección de la salud pertenece a la segunda generación de los derechos humanos, donde el Estado se constituye en un “Estado Social de Derecho”, para enfrentar las exigencias de que los derechos humanos de circunscripción sociales y económicos descritos en las normas constitucionales, sean realmente accesibles a todas las personas como normas jurídicas de carácter programático.

El acceso al servicio de salud es el proceso por el cual se logra satisfacer una necesidad, ya sea de un individuo o una comunidad.

Es obligación entonces de los funcionarios públicos que prestan este servicio, de no interferir o impedir el acceso a dichos servicios en los términos legales; de realizar la adecuada prestación; y en su caso, supervisión de los mismos así como conformar la debida infraestructura normativa e institucional que se requiere para que ésta sea eficaz e íntegra.

Para estos efectos es necesario referirse al contenido del artículo 4° párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que claramente establece que *“toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las Entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”*.

Ahora bien, del análisis lógico-jurídico llevado a cabo sobre las constancias que integran el expediente que ahora se resuelve, este organismo garante de derechos humanos pudo acreditar actos violatorios de derechos humanos de los usuarios del Hospital ****, consistente en la prestación indebida del servicio público que éste brinda, debido a que no cuenta con personal médico suficiente para ello, así como tampoco los bienes materiales indispensables para prestar un servicio de calidad.

De lo expuesto se advierte que dicho Hospital no presta servicios médicos las 24 horas del día, aunado a ello, cuando es necesario trasladar a un paciente a otra institución para recibir la atención médica requerida, dicho traslado se realiza en la ambulancia del mismo Hospital, con la exigencia de que los mismos pacientes o sus familiares paguen dicho traslado, no obstante que no existe un ordenamiento legal que establezca que de no contar con los recursos materiales y humanos para proporcionar de manera íntegra la atención médica, los usuarios deban solventar los gastos, materializándose por tales circunstancias el deficiente servicio por parte de dicho Hospital, violentando con

ello, como ya se hizo mención, lo que establece el artículo 4º, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Igualmente es importante resaltar que la falta de recursos humanos o materiales para la atención médica de un paciente, puede generar consecuencias graves para la vida de los mismos, y que en la medida de lo posible debe ser corregido, pues de no subsanar dichas deficiencias puede implicar la pérdida incluso de vidas.

En ese sentido, con motivo del *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*, los Estados están obligados a adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente por todos los medios apropiados la adopción de medidas legislativas y administrativas para la plena efectividad de los derechos.

Por otro lado no basta con prever las medidas para la correcta provisión del servicio, éste debe ser efectivo, eficiente, adecuado e inmediato.

La falta de esas condiciones, puede llevar a configurar auténticas deficiencias, atrasos, suspensiones o negativas de un servicio público de salud y con ello, la violación del derecho de los pacientes a la protección de su salud.

Esta CEDH considera de igual forma que se transgrede con lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual dispone las obligaciones que todo funcionario público debe cumplir en el desempeño de sus funciones, el cual a la letra dice:

“Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.”

Este derecho genérico también está consagrado en diversas disposiciones a nivel internacional, como lo son:

- El artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre – aprobada por la Novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá, Colombia y adoptada el 2 de mayo de 1948; y,
- El artículo 10.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” –publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de septiembre de 1998, que en adelante se transcriben.

Lo anterior también es robustecido con el dictamen elaborado por el médico adscrito a esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ya que una vez que realizó el estudio del expediente que ahora se resuelve, concluye que la salud es un factor de progreso y fuente de oportunidades para el bienestar individual y colectivo, así como un medio eficaz para el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las personas, que incide directamente en el mejoramiento de la calidad de vida de los individuos y de la sociedad.

De igual forma se afirma que la medicina moderna está dirigida a revertir el creciente número de decesos asociados a enfermedades graves de aparición súbita o a accidentes con lesiones severas, llevando la atención fuera de los establecimientos médicos para llegar y beneficiar directamente al paciente; por ello, la atención que se inicia desde el primer contacto debe ser de calidad y en el caso que nos ocupa el Hospital ****, dista mucho de prestar un servicio de tal magnitud, vulnerando con ello como ya se dijo lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tratados internacionales celebrados y ratificados por México, como son los siguientes:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

“Artículo 12. 1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.

Declaración Universal de Derechos Humanos:

“Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

“Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad.”

Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, sociales y Culturales:

“1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.”

Si bien es cierto del segundo informe solicitado al encargado del Hospital ****, menciona contar con las especialidades requeridas para cubrir la mayoría de las necesidades de los usuarios en su atención médica y contar ya con una ambulancia para los traslados de los pacientes en caso de resultar necesario, de la visita que personal de este organismo estatal realizó a las instalaciones de dicho Hospital, el médico Director del mismo externó que por la lejanía en que se encuentran ubicados, resulta difícil encontrar a médicos especialistas que estén dispuestos a trabajar en ese Hospital.

Igualmente manifestó que cuenta con pocos recursos económicos y que ese es el motivo principal de que el servicio que prestan sea insuficiente, así como también que en tratándose de los traslados a otros hospitales se recurre al apoyo de los familiares del mismo paciente.

Corroborando con la manifestación del encargado del Hospital así como del Director del mismo y el dictamen elaborado por el médico adscrito a este organismo estatal, la violación a los derechos humanos de los usuarios por parte del personal médico de dicha institución es evidente.

La Ley General de Salud establece:

“Artículo 1o. La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social.”

Artículo 2o. El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;

III. La protección y el acrecentamiento de los valores que coadyuvan a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

IV. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;

V. El disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

VI. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud, y

VII. El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud.

Artículo 5o. El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

Artículo 6o. El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;

.....

VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;

.....

Artículo 9o. Los gobiernos de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los acuerdos de coordinación que celebren con la Secretaría de Salud a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Con tal propósito, los gobiernos de las entidades federativas planearán, organizarán y desarrollarán en sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud, procurando su participación programática en el Sistema Nacional de Salud.

La Secretaría de Salud auxiliará, cuando lo soliciten los estados, en las acciones de descentralización a los municipios que aquéllos lleven a cabo.

Artículo 12. La competencia de las autoridades sanitarias en la planeación, regulación, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, se regirá por las disposiciones de esta Ley y demás normas generales aplicables.

Artículo 23. Para los efectos de esta Ley, se entiende por servicios de salud todas aquellas acciones realizadas en beneficio del individuo y de la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad.

Artículo 24. Los servicios de salud se clasifican en tres tipos:

- I. De atención médica;
- II. De salud pública, y
- III. De asistencia social.”

La misma Ley General de Salud, en relación con los prestadores de servicios de salud, establece:

“Artículo 34. Para los efectos de esta Ley, los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en:

- I. Servicios públicos a la población en general;
- II. Servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social o los que con sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos de usuarios;
- III. Servicios sociales y privados, sea cual fuere la forma en que se contraten, y

IV. Otros que se presten de conformidad con lo que establezca la autoridad sanitaria.”

La Ley de Salud del Estado de Sinaloa, establece:

“Artículo 2º. Son finalidades de la presente ley:

El bienestar físico y mental del género humano, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades;

La protección y la prolongación de la vida humana así como el mejoramiento de su calidad;

La protección y el enriquecimiento de los valores que coadyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social;

La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población, en la preservación, conservación y restauración de la salud;

El acceso a los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población;

El conocimiento de los servicios de salud para su adecuado aprovechamiento y uso, y

El desarrollo de la enseñanza, la investigación científica y tecnológica para la salud.”

Así también esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos se ha manifestado reiteradamente que las atribuciones de este organismo son las de analizar si los actos llevados a cabo por los funcionarios públicos sean conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a los derechos constitucionales que dichas normas otorgan y/o reconocen.

Con base en lo expuesto anteriormente y al tener como marco el artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que precisa como objetivo último en la entidad federativa la protección de la dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales que le son inherentes, así como al artículo 4º Bis segundo párrafo, que afirma que los derechos humanos tienen eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa se permite formular a usted, señor Secretario de Salud del Estado, la siguiente:

V. RECOMENDACIÓN

ÚNICA. Se establezcan y cumplan los programas y se tomen las medidas administrativas necesarias para que el Hospital **** cuente con el personal médico suficiente y la infraestructura adecuada, encaminada a la prestación del derecho a la salud a que todo ciudadano tiene derecho y éste le sea proporcionado de manera íntegra de acuerdo con la legislación ya mencionada y aplicable al caso.

La presente Recomendación de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

Notifíquese al doctor Héctor Ponce Ramos, Secretario de Salud del Estado, la presente Recomendación misma que en los archivos de esta Comisión quedó registrada bajo el número 27/2010, debiendo remitírsele con el oficio de notificación correspondiente una versión de la misma con firma autógrafa del infrascrito.

Que de conformidad con lo estatuido por el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dentro de un plazo de cinco días hábiles computable a partir del día siguiente de aquél en que se haga la notificación respectiva, manifieste a esta Comisión si acepta la presente Recomendación, solicitándosele expresamente que en caso de negativa motive y fundamente debidamente la no aceptación; esto es, que exponga una a una sus contra argumentaciones, de modo tal que se demuestre que los razonamientos expuestos por esta Comisión carecen de sustento, adolecen de congruencia o, por cualquiera otra razón, resulten inatendibles.

Todo ello en función de la obligación de todos de observar las leyes y específicamente, de su protesta de guardar la Constitución tanto la General de la República que la del Estado así como las leyes emanadas de una y de otra.

Ahora bien, en caso de aceptación de la misma, deberá entregar dentro de los cinco días siguientes las pruebas correspondientes a su cumplimiento.

La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente Recomendación no fue aceptada, por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos quedará en libertad de hacer pública precisamente esa circunstancia.

Notifíquese a los integrantes de la Institución de Asistencia Privada “Instituto de Ayuda para Familias de Choix” de la presente Recomendación, remitiéndole con el oficio respectivo un ejemplar de esta resolución con firma autógrafa del infrascrito para su conocimiento y efectos legales procedentes.

EL PRESIDENTE

DR. JUAN JOSÉ RÍOS ESTAVILLO